Lunes 8 de Octubre 79
"Unomásuno"

Plaza pública

Miguel Angel Granados Chapa

► *Agresión al reportero Altamira*

► *Lenta justicia en Nuevo León*

El todavía flamante gobierno de don Alfonso Martínez Domínguez en Nuevo León puede no aprobar el primer *test* importante al que se enfrenta, relacionado con asuntos de violencia y justicia, a los que el gobernador debería ser muy sensible.

El 15 de septiembre pasado, el reportero de policía de *El Diario de Monterrey*, Manuel Altamira Peláez, fue conducido a un bar mediante un ardid, y allí fue golpeado de manera tan brutal que hoy mismo sigue, más de tres semanas después, hospitalizado a causa de las fracturas que la agresión le produjo. Para además de todo vejarlo, sus golpeadores volcaron sobre la cabeza del reportero una bolsa llena de excremento humano.

El propio Altamira denunció a sus verdugos. Se trata de un abogado con temibles antecedentes, Leopoldo del Real Ibáñez o Leopoldo Correa Ibáñez, como también se hace llamar. Altamira había publicado en el cotidiano en que trabaja varias denuncias contra Del Real, y éste quiso hacerle una advertencia. La próxima vez sería peor, amenazó al reportero durante la golpiza misma.

Como es obvio, el caso ha conmovido a la opinión regiomontana, que conoce bien a los protagonistas de los hechos. Por un lado, Altamira es un terco creyente en la dignidad de su oficio. A principios de 1977 formó parte del equipo que siguió al periodista Fernando Cantú cuando éste abandonó la dirección de *Tribuna* para no admitir que ese diario regiomontano fuese dirigido por el ex secretario de Gobernación, Moya Palencia, designado por aquellos días director general de la antigua cadena "de los soles", la del coronel García Valseca. Con ese grupo, Altamira participó en una hermosa aunque fallida aventura editorial, que consistió en publicar durante un efímero periodo una revista titulada *Crónica*, dirigida por Cantú. Luego, Altamira pasó al *Diano* y allí se ha significado por la nondura que quiere dar a su trabajo noticioso.

Del Real, en cambio, ha agredido al fiscal

federal Pedro Neyra; a los hermanos Castillo, dirigentes de la federación cetemista local; al abogado Horacio Moyer Quintanilla, etcétera. Horas después de haber golpeado y hecho golpear al reportero Altamira, tuvo un fuerte altercado, por razones diversas, con un comandante de la Policía Judicial Federal, Luis Manuel Mendoza Romero.

No obstante todo, se ha notado una peculiar lentitud en la persecución de este delito. El gobernador Martínez Domínguez visitó en el hospital Muguerza al periodista agredido, más de una semana después del atentado. Aprovechó para hacer un discurso sobre la libertad de prensa, y anunció que la agresión no quedaría impune. Sin embargo, el procedimiento se inició con escrúpulos legales sorprendentes. Se giraron tres invitaciones para que Del Real acudiera a declarar, que por supuesto fueron desoidas por el citado. Rasgándose las vestiduras y proclamando su inocencia, escribió una carta a los periódicos regiomontanos anunciando que comparecería el martes 2 de octubre y no lo hizo. Finalmente, el jueves de la semana pasada se presentó a formular su declaración preparatoria, pues al fin se dictó orden de aprehensión contra él. Naturalmente, no quedó detenido, pues cuenta con un amparo.

La opinión regiomontana teme que la agresión a Altamira permanezca sin castigo, porque Del Real está emparentado con el licenciado Alejandro Garza Delgado, que es de las confianzas del gobernador. Además, Del Real es un pato que le tira a las escopetas: en su preparatoria contracusó a Altamira de serios delitos: el reportero, según su golpeador, "ha hecho o ha participado en movimientos izquierdistas en contra del gobierno del estado". Eso lo supo porque realizó "investigaciones personales sobre los hechos que se le atribuyen" (*El Norte*, 5 de octubre).

A ver si es cierto que, como le dijo Martínez Domínguez a Altamira, "nada que atente contra de ella (la libertad de prensa) lo permitirá el gobierno".

Plaza pública

► *Ciencia y virtud de don Fidel*

► *Las razones de los senadores*

Miguel Angel Granados Chapa

Largo y denso, el dictamen de los senadores que atribuyeron la medalla *Belisario Domínguez* a don Fidel Velázquez no nos dice si es por su ciencia o por su virtud, una u otra en grado eminente, que le otorgan tal preseña y tampoco nos aclaran si la mereció como servidor sólo de nuestra patria o de la humanidad entera.

El decreto que creó ese estímulo, el 3 de enero de 1953, y su reglamento, del 25 de noviembre siguiente son, en efecto, explícitos e inequívocos: "Se crea la medalla de honor *Belisario Domínguez* del Senado de la República —dice el artículo primero del decreto para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad". Honestos al fin y al cabo, los senadores que distinguieron a don Fidel no llegaron al extremo de querer fundar tal ciencia o tal virtud, aunque ello signifique una violación de la letra de los documentos que crearon esa medalla. Tales ordenamientos, por cierto, no merecen de los legisladores ningún respeto: los violan hasta en las nimiedades. El dictamen está fechado el 2 de octubre, no obstante que el artículo sexto del reglamento dispone que el acuerdo respectivo se adopte entre el 2 y el 20 de septiembre.

Pero eso, por supuesto, es una banalidad. Lo importante es la traición al espíritu que, a pesar de la retórica, puede observarse en la institución de este premio. *Belisario Domínguez* representa el valor de la palabra contra el poder arbitrario y homicida. Atribuirle la medalla que lleva su nombre a un hombre del poder la convierte en una caricatura grotesca de sí misma.

Es cierto que no siempre fue atinado el discernimiento de la preseña. Pero la mayor parte de las 26 personas que antes la recibieron tenían méritos en el combate revolucionario, en la acción cultural o diplomática. Aunque con la edad su militancia revolucionaria se haya atemperado no estuvo mal que hubiese sido premiado el general Esteban Baca Calderón, precursor del movimiento armado de 1910. También militaron en él otros beneficiarios del premio: Roque Estrada, Antonio Díaz Soto y Gama, María Hernández Zarco, Aurelio Manrique, Adrián Aguirre Benavides, Ramón F. Iturbide Duarte durante y después de la revolución fueron servidores eminentes de la patria el general Heriberto Jara y don Isidoro Fabela. Su noble magisterio justificó el premio a dona Rosaura Zapata, don Erasmo Castellanos, y don Miguel Angel Ceballos. Su fuego interior y el de los volcanes que pintó proporcionaron buena parte a la decisión de honrar con la *Belisario Domínguez* al doctor Atl. Y más recientemente no se erró al atribuirle al embajador Rafael de la Colina o al doctor Ignacio Chávez.

Nunca se atribuyó la medalla a un político dotado de poder, porque ese solo hecho enturbia la asignación. Aunque en el caso presente parecen claros los mecanismos que condujeron a la decisión. Por una parte, con trivialidades rituales se busca compensar a un sector obrero que mal de su grado ha tenido que cargar el peso de la crisis. Y, por otra parte, el líder del Senado, don Joaquín Gamboa Pascoe, que seguramente influyó para el discernimiento de la medalla a Velázquez, renueva con ello sus posibilidades de suceder a don Fidel, como ya lo hizo en la federación cetermista local con don Jesús Yurén. Menuda dificultad tendrá Cuauhtémoc Anda, el joven economista que tendrá que cantar el martes próximo en nombre de su Cámara, la de diputados, las loas que merece el secretario general perpetuo de la CTM.

uno más uno

Nuevo papel del Estado en la economía

Al finalizar la primera mitad del sexenio de José López Portillo, la economía mexicana registra una evidente recuperación. Como ha dicho el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, la planeación y concertación de acciones delinean un país pujante. Ahora toca consolidar lo alcanzado, darle permanencia, afinar programas.

Sin embargo, no todo termina ahí. La inflación sigue siendo del 18 por ciento para este año, lo que sumado a los porcentajes de los tres años anteriores componen un cuadro elocuente de los sacrificios que ha debido soportar la gran mayoría de los mexicanos sobre quienes ha recaído el mayor peso de las políticas estabilizadoras.

Por otro lado, como se desprende de lo dicho por el mismo secretario de Patrimonio, se están presentando cuellos de botella en algunos sectores por lo que respecta a su capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda.

Por lo tanto, precisamente ahora que se está a la mitad del camino y en la coyuntura en que han terminado los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, empieza a resaltar la necesidad de replantear el papel del Estado. Habría que pensar principalmente en las inversiones de riesgo y en los campos económicos donde la iniciativa privada se frena. Pero también habría que preocuparse por la alternativa dejada en suspenso durante este trienio.

A saber, que después de haber contenido las exigencias populares —estimuladas, dicho sea de paso por las presiones hacia mayores consumos— para otorgar preferencia a la creación del clima de confianza reclamado por los empresarios, sería llegado el momento de restablecer el equilibrio. O sea, habría que empezar a aligerar la carga de trabajadores campesinos, dinamizar el papel económico del Estado como táctica para redondear la estrategia antinflacionaria.

La historia reciente nos enseña que los índices positivos en la economía no necesariamente conduce a la paz social. Y que bajo las tasas elevadas del producto se incuban inquietudes tan legítimas como riesgosas para la armonía nacional.

Para la iniciativa presidencial que otorga un aumento de \$1,600 a pensionados del IMSS

Javier Zamora

Las diputaciones de PDM—, de dos legisladores Camarena y a través de un medio de una acción parlamentaria del congreso aprobó la iniciativa de un aumento de mil 600 pesos

condiciones en que en México existe la seguridad social y refleja problemas sociales "que requieren solución, cambios indispensables en la política económica y en particular, en la política salarial del gobierno".

Coincidió con Unzueta el legislador Miguel Terrazas, quien demandó además un cambio en la actual estructura financiera del IMSS y que el derecho al trabajo obligue también a que el estado otorgue el derecho a una jubilación